

Exp: 09-016751-0007-CO

Res. N° 2010001386

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y veintiséis minutos del veintiséis de enero del dos mil diez.

Recurso de amparo interpuesto por MDC, cédula 0-0000-0000; contra Cero Riesgo Información Crediticia Digitalizada, Información Inteligente Datum Net Sociedad Anónima, Procesamiento de Datos Datum Net Sociedad Anónima y Teletec Sociedad Anónima.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 10:35 horas de 10 de noviembre de 2009, el recurrente manifiesta que ha laborado como Investigador del Organismo de Investigación Judicial durante, aproximadamente, 5 años, en propiedad. Establece que, en virtud de su puesto, ha recibido llamadas anónimas a la casa de sus padres y de otros familiares, por medio de las cuales ciertas personas han indicado que cuentan con su fotografía, direcciones, teléfono y nombres de familiares e hijos, por lo que pueden dañarlos en cualquier momento. Considera vulnerados sus derechos fundamentales. El recurrente solicita que se declare con lugar el recurso (folio 1).

2.- WAJL, representante judicial de PROCESAMIENTO DE DATOS DATUM NET Sociedad Anónima, contesta la audiencia que se otorgó por resolución de 17:09 horas de 10 de noviembre de 2009. Explica que únicamente tienen en su poder información de interés público sobre el recurrente. Asegura que, en el reporte que adjunta como prueba, constan los usuarios que han consultado, en su sistema, los datos del accionante, los cuales lo han hecho con plena justificación. Sostiene que la actividad que ellos realizan ha sido reconocida por la Sala como lícita y útil. Alega que la información que poseen del amparado en nada menoscaba su derecho a la autodeterminación informativa o su derecho al olvido. Asegura que, posterior a la interposición del amparo, toda la información del accionante fue suprimida de sus bases de datos, esto como consecuencia del sistema Opt Out, que le permite a cualquier persona gestionar, directamente, con su empresa, ser suprimido, por completo, de sus bases de datos. Señala que no vulneraron los derechos del recurrente. Solicita que se desestime el recurso planteado (folio 25).

3.- MCS, apoderado generalísimo de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, contesta la audiencia que se otorgó por resolución de 17:09 horas de 10 de noviembre de 2009. Sostiene que la información que poseen del recurrente es pública. Agrega que todos los datos se obtienen de bases públicas que son actualizadas constantemente. Asegura que no guardan información sensible del amparado. Alega que no se han utilizado de forma inapropiada los datos del tutelado. Solicita que se desestime el recurso planteado (folio 42).

4.- MFQA y YHCL, representantes legales con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa TELETEC Sociedad Anónima, contestan la audiencia que se otorgó por resolución de 17:09 horas de 10 de noviembre de 2009. Señalan que únicamente cuentan con información de carácter comercial y crediticia del recurrente, la cual ha sido obtenida de fuentes públicas y legales. Agregan que esos datos pretenden brindar elementos de protección crediticia a diversos inversionistas. Aseguran que no poseen información del recurrente que no esté

estrictamente dirigida a la prevención del riesgo crediticio. Indican que los datos que tienen en su poder son públicos, correctos, exactos, claros, veraces, vigentes, completos, actualizados y apegados a derecho. Manifiestan que no poseen datos sensibles del accionante. Estiman que han respetado cabalmente los derechos a la autodeterminación informativa y al olvido del accionante. Argumentan que la Sala ya ha reconocido la necesidad del servicio que, como protectoras de crédito, brindan al sector financiero, bancario y comercial del país. Consideran que no vulneraron los derechos del recurrente. Solicitan que se desestime el recurso planteado (folio 53).

5.- El 9 de diciembre de 2009, el secretario de la Sala Constitucional certificó que el presidente y el representante legal de Información Inteligente Datum Sociedad Anónima no rindieron el informe que se ordenó en la resolución de 17:09 horas de 10 de noviembre de 2009 (folio 90).

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- Objeto del recurso. El recurrente impugna que diversas empresas dedicadas a la protección de las operaciones crediticias cuentan con datos sensibles sobre su persona, los cuales han sido facilitados a terceros, poniendo en riesgo su intimidad e integridad y la de sus familiares. Considera vulnerados sus derechos fundamentales y, por ende, el Derecho de la Constitución.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) En la base de datos de PROCESAMIENTO DE DATOS DATUM NET Sociedad Anónima, contaban con una dirección exacta a nombre del recurrente (folio 31).

b) Todos los datos a nombre del recurrente, con excepción de su nombre y número de cédula, fueron suprimidos de la base de datos de PROCESAMIENTO DE DATOS DATUM NET Sociedad Anónima (folio 36).

c) En la base de datos de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, cuentan con diversas direcciones exactas y un número de teléfono a nombre del recurrente (folio 44).

d) En la base de datos de TELETEC Sociedad Anónima, únicamente consta información de carácter crediticio y comercial referente al amparado (contestación de la audiencia a folio 53 y folio 81).

III.- Hechos no probados. Ninguno que interese para resolver el amparo.

IV.- Sobre el derecho de intimidad, privacidad, y autodeterminación informativa. La Sala ha reconocido con anterioridad, que la ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa en el que vivimos. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas, que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y

cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido, así, el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a la cual esa información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificadora, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para un fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los objetivos que con este se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso que se le cause un perjuicio ilegítimo. Al respecto, mediante sentencia 2002-08996 de 10:38 horas de 13 de septiembre de 2002, este Tribunal estableció, claramente, cuales han de ser las reglas que deben cumplirse a fin de garantizar el respeto y la protección de datos. En este sentido dispuso:

“IV.- Principios básicos para la protección de datos. Ya este Tribunal, en la sentencia 5802-99 de las 15:36 horas del 27 de julio de 1999, citada supra, se refirió a los lineamientos que debe establecer la legislación que regule el tratamiento automatizado de datos personales. A falta de ella, la Sala estima procedente insistir en esas reglas a fin de que se consideren principios básicos para la protección de datos. Entre los fundamentales están:

1.- El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a quienes se soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por apoderado con poder o cláusula especial; las personas jurídicas por medio de su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial

1. De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

2. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se les formulen.

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

4. De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad.

5. De la identidad y dirección del responsable del fichero. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, figurarán en los mismos en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

2. El consentimiento del afectado. Otro principio de capital importancia es el consentimiento del afectado, según el cual, el titular de los datos deberá dar por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa dentro de límites razonables. Es obvio que el consentimiento podrá ser revocado, pero la revocatoria no producirá efectos retroactivos.

3.- La Calidad de los datos. Sólo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades

legítimos para que se han obtenido. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para que los datos hubieren sido recogidos. Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado. Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificadas, actualizados o complementados. Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo o estuviere prohibida su recolección. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos y registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado en un período que sea superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido recabados o registrados. Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por el afectado. Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor. Se prohíbe tener sobre una persona más datos que los necesarios a los fines del fichero.

4.- Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o ficheros privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido.

5. - El principio de seguridad de los datos. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados que no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y programas. El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional.

6.- Reglas para la cesión de datos. Los datos de carácter personal conservados en archivos o bases de datos públicos o privados, sólo podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del afectado. Lo independientemente de la titularidad pública o privada del fichero. El consentimiento para la cesión podrá ser revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.

7.- Derechos y garantías de las personas.-Cualquier persona puede: Conocer la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad o sujeto particular encargado del fichero. Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos, la confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible. Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su actualización o la eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente Ley. La autoridad o el responsable del

fichero deben cumplir con lo pedido gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días contado a partir de la recepción de la solicitud.

8.- El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información garantiza las siguientes facultades del afectado:

A acceder directamente o conocer las informaciones y datos relativos a su persona.

A conocer la finalidad de los datos a él referidos y al uso que se haya hecho de los mismos.

A solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.

Para obtener en su caso la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al uso de sus datos personales.

9.- Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano. Sólo por ley se podrán establecer excepciones y restricciones en los principios, derechos y garantías aquí enunciados, siempre que aquellas sean justas, razonables y acordes con el principio democrático. Las mencionadas excepciones y restricciones solo podrán plantearse para alcanzar fines legales en alguno de los siguientes campos:

La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la seguridad económica del Estado o para la represión de las infracciones penales. La protección de las propias personas concernidas, así como los derechos y libertades de otras personas. El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que las personas sean identificadas.

Siempre existirá recurso para que la autoridad judicial decida si en un caso concreto estamos ante una excepción o restricción razonable [...].”

Asimismo en sentencia 2004-12239 de 14:25 horas de 29 de octubre de 2004, respecto de los números telefónicos, la Sala dispuso:

“[...] Sobre el numero telefónico registrado a nombre del recurrente en DATUM.NET.

En un caso como el de estudio, donde el abonado pagando un monto adicional ha excluido de la guía de usuarios su número telefónico, al incluir en una base de datos, ese número privado, el administrador del fichero lesionó el derecho a la autodeterminación informativa del amparado, al obligarlo a tolerar un uso de sus datos personales de acceso restringido, distinto del que él ha consentido [...].”

En virtud de lo expuesto, puede decirse que el derecho de autodeterminación tiene como base la transparencia de los datos, el de correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que de la información se haga debe ser acorde con lo que con ella se persigue.

V.- Sobre el fondo. En este caso, de acuerdo con los elementos probatorios acopiados dentro del expediente, de los hechos que se han tenido como demostrados y tras un exhaustivo análisis de los datos que las empresas recurridas almacenan, en sus bases,

sobre el recurrente, se determinó que, en su mayoría, esa información es una reproducción de la que se encuentra disponible en registros públicos o bien, se trata de información relevante sobre el comportamiento histórico de pagos del accionante, cuyo empleo la Sala ha calificado como legítimo, pues contribuye a aminorar el riesgo inherente al mercado crediticio. En ese sentido, la Sala considera que la información que posee la empresa TELETEC Sociedad Anónima es únicamente aquella relacionada con los movimientos crediticios y comerciales del recurrente, sin que posean ningún dato personal de él que no conste en un registro público de datos. De esa forma, en cuanto a la empresa TELETEC Sociedad Anónima se refiere, el amparo debe desestimarse, en todos sus extremos.

VI.- No obstante, se aprecia que, en contravención con la línea jurisprudencial de este Tribunal, en la base de datos de PROCESAMIENTO DE DATOS DATUM NET Sociedad Anónima se consignaba la dirección exacta de la casa de habitación del recurrente, la cual fue eliminada, junto con la demás información del amparado, salvo su nombre y número de cédula, únicamente con motivo de la interposición de este recurso, lo cual implica una vulneración del derecho a la autodeterminación informativa del recurrente, la cual ha cesado solo en virtud de que el planteó el amparo, por lo que se impone la estimatoria del recurso, sin dictar orden alguna, pues la lesión ya se ha detenido.

VII.- Adicionalmente, consta en los elementos de juicio allegados al expediente y en los hechos que se han tenido como demostrados que, en la base de datos de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, se encuentran almacenadas diversas direcciones exactas de casas de habitación donde puede ser localizado el recurrente. Esa información, como se explicó anteriormente, es de acceso restringido, razón por la cual, su manipulación, por parte de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, lesiona el derecho de autodeterminación informativa del tutelado, en tanto no se demostró que él hubiera otorgado la autorización pertinente. Por otra parte, en lo referente a los números telefónicos que CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima facilita a sus clientes, se debe aclarar que, obviamente, su utilización en este tipo de bases de datos, no es viable cuando el abonado hubiese dispuesto que se tenga el servicio como privado. En el presente caso, el accionante no acreditó haber gestionado lo necesario en ese sentido, motivo por el cual, en cuanto a ese extremo, el recurso debe ser desestimado. Así las cosas, lo procedente es estimar parcialmente el recurso por la lesión del derecho de autodeterminación informativa, tutelado por el artículo 24 de la Constitución Política, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a MCS, apoderado generalísimo de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que, de inmediato, suprima de sus correspondientes bases de datos cualquier referencia a la dirección exacta de la casa de habitación de por MDC, cédula 1-0749-0707, advirtiéndole que, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliera o no la hiciera cumplir, siempre que el delito no

esté más gravemente penado. En cuanto se dirige contra TELETEC Sociedad Anónima, se declara sin lugar el recurso. Se condena a PROCESAMIENTO DE DATOS DATUM NET Sociedad Anónima y a CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo civil. Notifíquese a MCS, apoderado generalísimo de CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA Sociedad Anónima, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal.